

México ha adoptado un enfoque gradual y multisectorial para avanzar en la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), combinando esfuerzos desde el ámbito gubernamental, académico, privado y de la sociedad civil. A pesar de no contar con una estrategia nacional de inteligencia artificial implementada, se han desarrollado diversos instrumentos, diagnósticos y espacios de gobernanza que sientan las bases para su consolidación futura.

Uno de los hitos iniciales fue la elaboración del Plan de IA para México (2018), una iniciativa liderada por CMinds en colaboración con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) y cooperación internacional. Aunque el plan no es un documento oficial, sirvió como punto de partida para identificar oportunidades, desafíos y recomendaciones para el diseño de una política pública en materia de IA. En este contexto, México también fue uno de los primeros países de la región en suscribir la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, reafirmando su compromiso con una visión centrada en los derechos humanos, la transparencia y la inclusión.

En 2024, la UNESCO presentó los resultados de la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación en Inteligencia Artificial (RAM) para México, elaborada junto con la Alianza Nacional para la IA (ANIA) y el Centro-i, con la participación de más de 250 actores multisectoriales. El reporte posiciona a México en el tercer lugar de preparación tecnológica para IA en América Latina, destacando fortalezas como la disponibilidad de talento especializado, con el mayor número de graduados de maestría en ciencias de la computación en la región; y un marco normativo sólido en materia de protección de datos, transparencia y acceso a la información. Al mismo tiempo, identifica retos significativos en inclusión digital, representación de lenguas indígenas, desarrollo de identidad digital única y fortalecimiento de políticas de datos abiertos.

En términos de gobernanza institucional, el país ha optado por un modelo descentralizado, donde diferentes entidades lideran aspectos clave de la agenda de IA. Entre ellas se encuentran la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el recientemente creado Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha promovido investigaciones en IA desde una perspectiva crítica, tecnológica y ética. A nivel subnacional, algunos gobiernos estatales han comenzado a incorporar tecnologías de IA en servicios públicos y procesos administrativos, aunque con grados variables de avance.

En el plano legislativo, México acumula más de 50 iniciativas relacionadas con IA desde 2020, sin que hasta la fecha exista una ley específica en vigor, ni a nivel federal ni local. Una de las propuestas recientes contempla reformas constitucionales para garantizar que el desarrollo tecnológico no genera sesgos discriminatorios, en particular hacia pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y plantea la facultad del Congreso para expedir una ley general sobre IA. Sin embargo, se trata de un texto de alcance amplio que aún no establece facultades regulatorias, de supervisión o sanción concretas.

En cuanto a infraestructura de datos, si bien se ha anunciado el desarrollo de un nuevo portal de datos abiertos, todavía no existe una política nacional de infraestructura de datos que articule estándares, roles y responsabilidades.

Diagnóstico

México cuenta con un ecosistema activo y en expansión en materia de inteligencia artificial, caracterizado por la participación de actores gubernamentales, académicos, privados y de la sociedad civil, así como por la adhesión a compromisos internacionales como la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA. Esto, lo define como un arquetipo de gobernanza multisectorial con potencial evolución a uno piramidal. Las iniciativas desarrolladas en la última década (incluyendo diagnósticos como el Plan de IA para México y la aplicación de la metodología RAM) han permitido identificar capacidades instaladas y áreas prioritarias para fortalecer la adopción ética y responsable de la IA. Sin embargo, la ausencia de una estrategia nacional con cronograma, proyectos específicos y marco regulatorio integral limita la articulación y el impacto de los esfuerzos existentes. El país se encuentra ante la oportunidad de consolidar una gobernanza más cohesionada, que traduzca las iniciativas dispersas en políticas públicas con objetivos medibles, coordinación interinstitucional y mecanismos de participación ciudadana.